

David ROLL (ed.). *¿Democracias prepago? El control de la financiación de la política, un reto para Colombia y Latinoamérica.* Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2010. 297 pp. ISBN 978-958-719-436-4.

Encontrar la mejor manera para financiar no sólo las campañas electorales sino la estructura y funcionamiento de los partidos políticos es uno de los mayores retos que tienen las democracias modernas. Ser transigentes en las fuentes de llegada de los recursos ha generado la permeabilidad de la política misma y ha logrado desdibujar la representación natural de una sociedad. Bien sea porque la financiación le permita a grupos económicos tener algún control de las leyes para su propio beneficio o porque los recursos sean la puerta de entrada de grupos criminales a las instituciones democráticas. El libro *¿Democracias prepago?*, editado por David Roll, pone el dedo en la llaga en estos temas y se adentra a explorar qué ha ocurrido hasta hoy y cuáles pueden ser las posibles salidas para que la relación dinero y política no sea un generador de inconvenientes que minen la credibilidad en la democracia.

El texto parte del estudio de casos colombianos tanto geográficamente como normativamente (diferentes leyes), pero es ambicioso desde su concepción porque explora

el proceso de financiación de la política en otros cuatro países latinoamericanos, donde se encuentran problemas muy similares que han saltado las alarmas y llevan a la reflexión que pasa primero por la necesidad de contar con estructuras políticas fuertes, alejadas de los personalismos y, posteriormente, ancladas en un sistema normativo donde no haya cabida a trampas que permitan violar la ley.

Los autores inician su recorrido en la estructura legal del financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales en Colombia, donde existe una peligrosa simbiosis entre grupos al margen de la ley y las autoridades en algunas regiones del país y se centran en demostrar cuáles son los atajos que se utilizan para que el dinero proveniente de actividades ilícitas como narcotráfico o secuestro llegue a manos de los candidatos señalados por las mafias. Así mismo se presenta un recuento histórico de varias elecciones en las que han participado reconocidos delincuentes como donantes, como la elección de Ernesto Samper a la Presidencia de la República en 1994 y el aporte del Cartel de Cali, que provocó un sonado escándalo que traspasó las barreras nacionales; y más recientemente el caso de la «parapolítica» en el cual los paramilitares ofrecieron apoyo económico a políticos de sus regiones, logrando controlar posteriormente un porcentaje significativo del Congreso, estimado por ellos mismos en un 35%.

Sobre este último caso, David Roll y Laura Ballén hacen, en uno de los capítulos, una interesante relación entre los aportes de las autodefensas y las implicaciones que tuvieron en el sistema de partidos. Se explica cómo esta injerencia de la criminalidad alteró la competencia en algunas zonas del país, otorgando sobrerrepresentación a partidos minoritarios o que fueron creados bajo el amparo de dineros ilícitos.

Capítulo aparte merece la Ley de Garantías Electorales promulgada en 2006 y que define el acceso a los recursos del Estado por parte de los candidatos que estén compitiendo contra el presidente en ejercicio que busque su reelección. Esta ley define la financiación previa por parte del Estado como una novedad en el sistema, lo que les permite a los aspirantes contar anticipadamente con los recursos necesarios para adelantar su campaña a la vez que establece topes de gastos. Esta normativa fue consensuada por el gobierno y los partidos de oposición cuando se introducía la figura de reelección presidencial en Colombia, que por más de cien años había estado prohibida constitucionalmente.

Finalmente, en el libro se expone la relación que hay entre campañas electorales locales y redes clientelares que apoyan candidatos, buscando beneficios posteriores como adjudicación de contratos o el sostenimiento de la burocracia que, aun en municipios pequeños, sigue siendo significativa. Como conclusión puede decirse que el gran problema que tiene Colombia no es encontrar la fuente pública –como muchos piden– para financiar completamente las campañas electorales (hoy hay un sistema mixto), lo que les daría equidad a todas las fuerzas políticas; sino hallar la forma de ser rigurosos en los controles a los recursos que provienen del crimen. En un país tan extenso y con tantos municipios, alejados de las grandes ciudades, donde imperan los grupos armados ilegales, es todavía una ilusión pretender que la totalidad de los recursos usados en el ejercicio democrático sean limpios y que éstos no influirán en las elecciones.

Carlos Andrés PÉREZ MÚNERA